**NEGOCIACIÓN DE DEUDAS DE PERSONAS NATURALES EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19**

TRABAJO MONOGRÁFICO

ANDRES FELIPE GORDILLO TORRES

JUAN CAMILO NAVARRO ARAUJO

MARIA CAMILA BALAGUERA VIVES

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

PROGRAMA DE DERECHO

FACULTAD DE HUMANIDADES

TUTOR: CHRISTIAN RODRIGUEZ MARTINEZ

SANTA MARTA- MAYO 2022

RESUMEN

Este trabajo monográfico es de tipo descriptivo, contiene una representación del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, detalle de sus principios, garantías y el procedimiento. La relación de los principales cambios que introdujo el Gobierno Colombiano mediante los Decretos Legislativos en el trámite de insolvencia empresarial que fueron aplicados al de las personas naturales no comerciantes, los cuales fueron dictados con la finalidad de preservar el orden público al margen de la Emergencia, Económica, social y ecológica el periodo de aislamiento social en la anualidad correspondiente a 2020, así como 2021. Por último, tiene un análisis de las sentencias de Constitucionalidad de las resoluciones con rango de ley adoptadas desde el Gobierno, con la síntesis por lo decidido en ella. Así como las conclusiones a las que se llegó de la aplicación del método descriptivo.

Palabras claves: descripción, trámite de insolvencia, persona natural no comerciante, principios, garantías, medidas COVID – 1

TABLA DE CONTENIDO

<i>INTRODUCCIÓN</i>	2
 <i>CAPITULO PRIMERO</i>	
<i>RÉGIMEN DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE</i>	
.....	4
1. Principios Del Régimen De Insolvencia	5
2. Generalidades Del Régimen De Insolvencia De Persona Natural No Comerciante.	6
3. Derechos Y Obligaciones Del Deudor Y De Los Acreedores	7
4. Procedimiento De Negociación De Deudas	12
 <i>CAPITULO SEGUNDO</i>	
<i>ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA</i>	
<i>EMPRESARIAL DURANTE LA PANDEMIA COVID – 19</i>	
	13
1. Medidas Transitorias Dispuestas Por El Decreto Legislativo 560 De 2020	14
2. Medidas Transitorias Dispuestas Por El Decreto Legislativo 772 De 2020	20
 <i>CAPITULO TERCERO</i>	
<i>ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE CONTROL DE</i>	
<i>CONSTITUCIONALIDAD</i>	
	27
1. Análisis De La Sentencia C-237 Del Año 2020 Dictada Por La Corte Constitucional De Colombia	27
2. Análisis De La Sentencia C-378 Del Año 2020	29
 <i>CONCLUSIONES</i>	 31
 <i>REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</i>	 35

INTRODUCCIÓN

El trámite de insolvencia de persona natural no comerciante nació de la necesidad de que las personas en situación de mora apalearan la posibilidad de regular sus pagos de manera tal que tuviera la misma oportunidad que los comerciantes tienen de llegar de manera consensuada con sus acreedores de poder pagar sus deudas.

Durante nuestro trabajo se analiza los cambios en la regulación del trámite en el régimen especial de insolvencia de persona natural no comerciante. Evidenciando el desarrollo normativo de dicho trámite.

En el periodo de emergencia social, económica y ecológica el órgano de la rama ejecutivo Colombiano había observado sólo las necesidades de los grandes, medianos y pequeños comerciante, no obstante, se permitió que las personas naturales no comerciantes se adhirieran a las facilidades o flexibilidades que se habían autorizado dentro del régimen de insolvencia para personas comerciantes.

Posteriormente en el resultado de la aplicación del método descriptivo, se muestra al lector que a pesar de que no se reguló, en principio para la persona natural, el gobierno nacional permitió que estas personas accedieran a las facilidades contempladas para los comerciantes, superando el vacío normativo y resolviendo transitoriamente la necesidad importante.

El presente trabajo se desarrolla en 3 capítulos. El primer capítulo se describe el régimen ordinario del Régimen de Persona Natural no Comerciante contenido en el Código General del proceso. Para el segundo capítulo se expone el análisis de los

cambios al régimen de insolvencia empresarial durante la pandemia en el COVID-19. Siguiendo el orden, en el tercer capítulo se contiene la descripción de las medidas transitorias tomadas en el marco de la Emergencia social. Económica y ecológica decretada por el Gobierno Colombiano. El cuarto y último capítulo se describe lo decidido por la Corte Constitucional en las sentencias de Constitucionalidad donde se realizó la revisión del texto de los Decretos Legislativos 560 DE 2020 y 772 de 2020, además se encuentra las conclusiones que se dieron como resultado después del planteamiento de la hipótesis de que en Colombia existe un régimen de insolvencia que brinda oportunidades y beneficios a los deudores pero que genera inseguridad a los acreedores.

CAPITULO PRIMERO
RÉGIMEN DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO
COMERCIANTE

El procedimiento a los que se someten las personas naturales no comerciantes que han tenido problemas con el pago de sus obligaciones, tiene como función salvaguardar derechos e intereses de acreedores como de deudores en condición de debilidad manifiesta económica. Permite someter a un procedimiento a una persona deudora que se encuentra en un momento de insolvencia, quiere decir que éste no tiene recursos económicos para colocarse al día con sus obligaciones económicas pendientes, es decir se encuentra frente a una incapacidad de tipo económica. Este concepto de incapacidad deriva de su situación financiera, por lo que al pasar un cierto tiempo esta situación puede cambiar y paulatinamente ese deudor puede ir poco a poco liquidando todas las obligaciones pendientes con sus acreedores.

Este tiene una exigencia especial, la cual consiste en que es aplicable a las personas naturales que no tengan la condición de comerciantes. Para definir a la persona natural, hay que remitirse al Código Civil en su artículo 74 (Congreso De La Republica De Colombia, 1873), el cual define a las personas naturales como:

“Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” Pág. 11

El Código General del Proceso reguló dicho el Régimen de Persona Natural no Comerciante, a través de su artículo 538 determinó unos presupuestos que deben cumplir las personas no comerciantes que requieran someterse a dicho procedimiento.

Para los fines previstos en este título, se entenderá que la persona natural no comerciante podrá acogerse a los procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en cesación de pagos. Estará en cesación de pagos la persona natural que como deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

1. Principios del régimen de insolvencia

En Colombia la primera vez que se habló de los principios del régimen de insolvencia fue a través de la Ley 1116 del 27 de noviembre de 2006 por medio de la cual se estableció el Régimen de Insolvencia Empresarial. Respecto de los principios de la persona natural no comerciante el Congreso de la República incluyó unos principios distintos que se contenían en la Ley 1380 de 2010, pero esta norma fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional por defectos de forma y el Congreso inició el trámite nuevamente, luego de ser aprobada, fue incluida con los mismos presupuestos en el Código General del Proceso en sus artículos 531 a 576.

Hoy por hoy se tiene como principios los de: *1-Universalidad, 2-Igualdad, 3-Eficiencia, 4-Información, 5-Negociabilidad, 6-Reciprocidad, 7-Gobernabilidad.*

2. Generalidades del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante

Es muy importante hacer referencia a conceptos generales en el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. Para ello se hará una descripción de los sujetos que intervienen en el trámite, quién es el competente para tramita dicho procedimiento de insolvencia, derechos y obligaciones de las partes y por último el procedimiento de la negociación de las deudas.

Los sujetos que intervienen en el procedimiento de negociación de las obligaciones insolutas son el acreedor y el deudor. Una aproximación al concepto de deudor es el dado de la siguiente manera:

“Un deudor es la persona física o jurídica que debe cumplir con una obligación o con el pago de una deuda que se ha contraído voluntariamente con otra persona, denominada acreedor.” (Conceptos Juridicos, 2021).

Para hablar de acreedores es pertinente tomar el concepto que se transcribe:

*“Un **acreedor** es el titular de un derecho de crédito que consiste en la posibilidad de exigir el cumplimiento de una obligación o el pago de una deuda a la otra parte (denominada deudor)” (Conceptos Juridicos, 2021)*

3. Derechos y obligaciones del deudor y de los acreedores

Los derechos del deudor están dados por los principios establecidos para el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, así las cosas, que sí por ejemplo estamos frente al Principio de Universalidad, estamos frente al deber que tiene el deudor para confesar todo ese conjunto de bienes que hacen parte de su patrimonio.

De acuerdo a lo establecido en la Carta Magna Colombiana (Constitución Política de Colombia, 1991) en su artículo 229:

“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.” (Pág. 54)

Desde el principio de la transparencia se tiene que el deudor tiene derecho a recibir justa y acorde a su situación, sería impertinente que un procedimiento como el que se hace referencia se tenga un costo muy elevado y el deudor no tenga la capacidad de pago para este, debido a esto tenemos que las tarifas de costo se encuentran reglamentadas en el decreto 2677 de 2012.

A partir del principio de información, la persona a cargo del procedimiento tiene la obligación de informarle al deudor todos los derechos, responsabilidades y obligaciones que conlleva la negociación de las obligaciones insolutas y a partir de ese punto el deudor puede tomar las decisiones a partir de la negociación buscando cuando

es la mejor opción que beneficie a ambas partes, en conclusión, el deudor tiene el derecho de recibir toda la información necesaria antes de llegar a un acuerdo

Unos de los derechos que incorpora este régimen sobre el deudor es la reincorporación de éste al sistema financiero, esto va ligado al derecho fundamental al habeas data, el cual el legislador lo ha definido de la siguiente manera:

El derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. (Ley 1266, 2008, art. 1).

Las obligaciones del deudor emanan directamente de la ley, no obstante uno de los principios del régimen de persona natural no comerciante conlleva a que el deudor pueda sobre pasar límites que le permitan tener facilidades a través del procedimiento de negociación de las obligaciones insolutas para que este se lleve de manera rápida y sencilla y pueda cumplirle a sus acreedores mediante un acuerdo donde se tenga en cuenta que no se vulneren los intereses de ambas partes y que sea lo más beneficioso

posible para los mismos. Sin dejar a un lado que este debe ser creado mediante un trato lleno de respeto y armonía entre las partes.

Derivado de uno de los principios generales del derecho como es el de la buena fe, se concluye que el deudor debe actuar con diligencia en la explicación de las causas de su crisis financiera, certificar de donde tenía sus ingresos, pero no una menos e importante es demostrar que no es comerciante y pueda someterse al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, debe actuar con sinceridad ante sus acreedores cuando llegue el momento que le dan la oportunidad de resolver, ofreciendo de manera objetiva como resolverá las obligaciones insolutas y su situación financiera.

Uno de los principales objetivos que trae consigo el régimen es el pago de las obligaciones insolutas, en este sentido tiene el deudor tiene la obligación de presentar una propuesta objetiva para pagar lo que debe a sus acreedores, no se analiza cuanto se deba ni su situación actual como tal, lo realmente importante es que ese deudor tenga el objetivo de cumplir con las obligaciones y acreencias.

No siendo menos importante se encuentra en la obligación de responder ante todas las quejas, reclamos y objeciones que puedan hacerle sus acreedores, de esto se deriva el principio de información, lo que quiere decir es que siempre tendrá la obligación de dar lo que se le está pidiendo en términos de información para poder llegar al mejor acuerdo entre las partes.

En relación a lo establecido en el (Codigo General del Proceso) en su articulo 540 “**DACIONES EN PAGO**”. En la propuesta de negociación de deudas, el deudor podrá

incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias de sus obligaciones. Derivado de este artículo se tiene que, si el deudor se compromete con bienes propios al pago de algunas obligaciones para extinguir una de las deudas, este tiene el deber de cuidado de esos bienes que posteriormente podría dar como dación de pago.

Los acreedores pueden ser personas naturales o jurídicas los cuales se pueden presentar en el proceso de negociación de las obligaciones insolutas, todo esto se debe a una relación que tuvo con el deudor donde nacieron unas obligaciones financieras, de productos o servicios que no le fueron canceladas en el momento pactado.

En efecto, el acreedor tiene en cuenta la buena fe del deudor, lo que quiere decir, es que si considera que sus intereses están siendo afectados porque el deudor ha mejorado su condición económica y puede solventar mejor lo debido o pactado en el acuerdo o porque conoce de una desigualdad en el acuerdo, este puede solicitar un reajuste en lo pactado para lograr una ecuanimidad entre las partes con el fin de que prevalezca el principio de igualdad.

Enmarca el principio de autonomía de la voluntad de las partes y negociabilidad, debido a que no es obligación que el acreedor que no decida asistir al concurso de acreedores a este se le debe respetar las acreencias que se le deben, así mismo se da con la etapa de negociación de deudas, si este decide no asistir puede realizar un escrito donde manifieste su voto mediante una presentación personal ante notario o el operador que esté llevando el proceso de insolvencia.

Las obligaciones de los acreedores emanan de la convocatoria que le hace el deudor, por lo que para cumplir su rol en el proceso de negociación de principio a fin este debe presentarse cuando es convocado, ya que es muy diferente a presentarse al concurso.

El acreedor tiene unas obligaciones por cumplir y son las siguientes:

Con lealtad, puesto que debe respetar las condiciones con las que realizó la acreencia o negocio con el deudor y con honestidad que si esta obligación corresponde a un crédito esta debe corresponder a las buenas prácticas de crédito como cobrar el interés teniendo en cuenta los límites legales de lo contrario estaría frente a situaciones tipificadas bajo la usura entre otros.

Cabe destacar dependiendo de qué entidad es acreedora, si no es una entidad financiera, tienen toda la obligación de entregar toda la información como cuando inició la obligación, qué condiciones se pactaron entre otras; cuando se trate de entidades financieras la corte constitucional mediante (Sentencia T/672 del 31 de agosto de 2010) a tratado el tema sobre la información en el ejercicio de la actividad financiera:

La Corte Constitucional ha señalado en este sentido que la información contenida en los documentos expedidos por las entidades bancarias debe ser veraz y caracterizarse por reflejar datos precisos acerca de los movimientos financieros y crediticios de los usuarios del sistema. (...).”

4. Procedimiento de negociación de deudas

El procedimiento de negociación de deudas nació de los supuestos establecidos en el Código General del Proceso Colombiano como requisitos previos para acceder al régimen para persona natural no comerciante en la etapa de negociación de las obligaciones insolutas, estos supuestos tienen la función de requerirle al deudor la presentación de unos medios o posibilidades de arreglo antes de iniciar el trámite de insolvencia.

De acuerdo con lo determinado por el CGP en su apartadado 538 y siguientes, son varios los requisitos que deben cumplir las personas naturales que se quieran adherir a dicho procedimiento, tales como la presentación de un informe de las causas por medio de las cuales cayó en cesación de pagos, una propuesta para la negociación de deudas, relación completa y actualizada de todos los acreedores, de los bienes, de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual, certificación de los ingresos del deudor, monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones, información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente y por último una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios (Congreso De La Republica, 2012, 12 de Julio).

CAPITULO SEGUNDO

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL DURANTE LA PANDEMIA COVID – 19

En este capítulo se estudiará el régimen de insolvencia empresarial, debido a que con las disposiciones de este régimen se llenan vacíos importantes que tiene el trámite de insolvencia para las personas naturales no comerciantes y que el Gobierno Nacional llenó como soporte a las personas naturales y jurídicas con incapacidad de pago en la emergencia declarada.

El Estado de Colombia mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional. Se estimó en su oportunidad que los efectos de la pandemia originada por efectos de la pandemia tendría repercusiones al sistema financiero, económico y social a grandes escalas en el País, razón por la cual se hacía necesario adoptar disposiciones en lo concerniente a los procesos concursales.

Por consiguiente Iván Duque mandatario presidencial, consideró prudente observar las declaraciones realizadas por los máximos representantes de entidades y organizaciones a nivel mundial como el Comité Monetario y Financiero Internacional, así como el Fondo monetario Internacional, del sentido de comulgar con que el país se encuentra en una situación sin precedentes y que a consecuencia de la interrupción inesperada de

la economía se hizo necesario brindar ayuda a los hogares colombianos, para ello se deben tomar medidas urgentes que ayuden a mitigar el impacto económico.

Es por ello, por lo que adoptó medidas transitorias especiales mediante los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 y la Ley 2159 de 2021, fundamentado entre otras consideraciones en que más de dos mil empresas enfrentarían el angustioso estado negativo de solvencia procedieran a iniciar el procedimiento, basado en el informe rendido la Superintendencia de Sociedades “Impacto económico COVID-19” y que el procedimiento concursal debía ser ajustado a la realidad que estaba atravesando la economía a consecuencia del COVID – 19.

1. Medidas transitorias dispuestas por el decreto legislativo 560 de 2020

Las medidas transitorias favorecieron, en principio, expresamente al trámite del régimen de insolvencia empresarial hasta por dos años contados a partir de la entrada en vigor de los Decretos en cuestión, brindando flexibilización en el trámite, en el sentido de:

1.1- Se omitió la auditoría realizada por el Juez a los documentos presentados con la solicitud, informes de emolumentos económicos o realización de las directrices dictadas por contadores. Tal encargo quedó a cargo del deudor y de su contador o revisor fiscal (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2020).

1.2.- Se autorizó al deudor, previa recomendación del promotor, a realizar pagos anticipados a acreedores laborales y proveedores no vinculados, que fueran titulares de

pequeñas acreencias sujetas al proceso de reorganización que no superasen el 5% del pasivo externo. Para tales pagos, se autorizó al deudor vender propiedades que no estuviesen inmiscuidos dentro lo común y corriente de sus ocupaciones que le generasen intereses pecuniarios, aun cuando sobre ellos pesen medidas cautelares. En este último caso, el deudor solicitará al juez competente el levantamiento de las medidas cautelares.

1.3- Se otorgó instrumentos para apaciguar los inconvenientes a nivel pecuniario y así mismo pudiesen tener una estimulación de crecimiento en sus actividades comerciales que fueron golpeadas por la pandemia, por otra parte se establecieron periodos dóciles para el cumplimiento del pago de las acreencias de sus titulares.

1.4- Se dio la oportunidad para que el concursado pudiera obtener créditos para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios durante la negociación, sin previa autorización del juez del concurso. En el evento en que el concursado demuestre que no obtuvo nueva financiación para el desarrollo ordinario de sus negocios podrá solicitar: Respaldo el crédito con garantías sobre sus propios activos, otorgar gravamen de segundo grado sobre los activos previamente gravados con garantía; otorgar una garantía de primer grado sobre bienes previamente gravados.

1.5- Se prestó salvamento en estado de liquidación inminente a empresas. Para esto cualquier titular de las obligaciones pendiente por pagar se exime de la disposición financiera por parte del ente que lleva el proceso, aportando nuevo capital.

1.6- En lo que se refiere a la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial, los deudores podrán acogerse a tratos de reestructuración del trámite debido a lo causado por los percances originados por la pandemia. Por lo que el insolvente se acoge al siguiente procedimiento:

1.6.1-El deudor deberá presentar un aviso de la intención de iniciar la negociación, de conformidad con la Ley 1116 de 2006 pero no cumplirá con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 9 ibidem, tal como se relacionó arriba.

1.6.2-El juez del concurso admitirá la solicitud y dará orden de iniciar la negociación. La cual no podrá exceder de 3 meses. Durante esta etapa los acreedores deberán presentar sus inconformidades al deudor respecto de la graduación y calificación de créditos y determinación de los derechos de votos. Esta etapa dará como resultado la elaboración de un acuerdo.

1.6.3- Elaborado el acuerdo, éste debe presentarse ante el juez del concurso para su confirmación, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 1116 de 2006. El juez del concurso convocará a una audiencia la cual se desarrollará de la siguiente manera: una vez instalada resolverá las inconformidades presentadas por los acreedores, basándose en las pruebas allegadas y analizando los fundamentos aducidos como fundamento. El juez del concurso impartirá legalidad al acuerdo confirmándolo o no. El acuerdo confirmado tendrá los

mismos efectos de un acuerdo de reorganización conforme a la Ley 1116 de 2006 y se impartirán las ordenes pertinentes del artículo 36.

Durante el término de la negociación, es decir, de 3 meses, ocurrirán los siguientes efectos:

- a. Se aplicarán las limitaciones establecidas en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, sin que pueda el juez pronunciarse sobre las medidas determinadas por orden judicial en litigios coactivos e ejecutivos, dar dineros a título de gestión a fiducias, ejecución de convenios, cesación de términos de tratos o solucionar inconvenientes entre las partes.
- b. Hay suspensión de los litigios ejecutivos y cobros coactivos, embargo y ejecución de valores contra deudores.
- c. Los pagos de las obligaciones insolutas pueden ser prorrogados, exceptuando de allí pago de salarios, aportes parafiscales y seguridad social hasta la confirmación del acuerdo o fracasadas las negociaciones.

El Decreto Legislativo 560 también dispuso un procedimiento de recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio a través de su Centro de Conciliación a través de la conciliación o mediación para las personas sujetas al régimen de insolvencia y para personas relacionadas en el artículo 3 de la Ley 1116 de 2006 que no tengan un régimen especial de recuperación de negocios.

Estando en las instalaciones de las diferentes Cámaras de Comercio del país, el intermediario está autorizado a revisar los informes entregados por el departamento de

contabilidad y financiero de la empresa, igualmente constata la prelación de las obligaciones, determina como se ha llevará lo que corresponde a los votos y no siendo menos analiza lo sugerido en el convenio de retribución de obligaciones insolutas ofrecidas por el insolvente. El procedimiento quedará sujeto las directrices dadas en el reglamento que establezca la Cámara de Comercio para ello. Tendrá una duración de tres meses, tiene las repercusiones presentadas en el régimen de insolvencia empresarial en sus apartados del artículo 17 no siendo menos no hay lugar a que se dejen si efectos las medidas antes tomadas.

Al igual que el procedimiento de reorganización empresarial hay una cesación de litigios ejecutivos, embargo y ejecución de valores contra deudores y cobro coactivo. Una vez se logre un acuerdo, éste debe remitirse ante el Juez del concurso o a los jueces civiles del circuito, en el caso de las personas descritas en el artículo 3 de la Ley 1116 de 2006, para que éste imparta legalidad, decida sobre las réplicas y los análisis.

Cuando se está frente a un impropio en la etapa de negociabilidad de emergencia ya sea para reorganizar o recuperar la empresa está podrá ser terminada y el insolvente puede realizar una nueva solicitud, pero debe cumplir un término y es hasta dentro del año siguiente, no obstante, puede solicitar un nuevo tramite siempre que se acoja a lo establecido en la ley del régimen de insolvencia empresarial o del régimen especial que se determine.

El gobierno nacional colombiano dispuso beneficios para las personas admitidas en un proceso de reorganización empresarial, para las que hayan celebrado acuerdos de

reorganización y se encuentre en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020, tales como:

- a. No pago de retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta.
- b. No cumplir con lo establecido en el apartado 807 que rige el estatuto tributario en lo que fue el año gravable 2020.
- c. Pago sólo del 50% del impuesto a título de IVA sobre las ventas,
- d. No finiquitar lo establecido de renta presuntiva en lo que fue el año gravable 2020.

Así mismo ordenó la suspensión hasta por el término de 24 meses:

- a. Imposibilidad de pago inmediato, según lo establecido en el apartado noveno de la normatividad del régimen de insolvencia empresarial.
- b. Trámite de procesos de liquidación por adjudicación, de que tratan los artículos 37 y 38 de la ley 1116 de 2006
- c. Configuración de la causal de disolución por pérdidas señaladas en el artículo 457 del Código de Comercio y 35 de la Ley 1258 de 2008.

Se suspendió también la obligación descrita en el numeral 5 del artículo 19 del Código de Comercio hasta el 31 de diciembre de 2020.

2. Medidas transitorias dispuestas por el decreto legislativo 772 de 2020

El Decreto Legislativo 772 de 2020, dispuso nuevamente como lo había hecho el decreto 560 el acceso rápido a los procesos de reorganización y liquidación. Autorizó el uso de las herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, protegió a empresa y los compradores de inmuebles destinados a vivienda, fortaleció el número de los auxiliares de justicia para los procesos de insolvencia, dispuso un proceso abreviado de reorganización abreviado y proceso de liquidación judicial simplificado para chicas insolvencias, aspectos que se pasarán a estudiar de la siguiente manera:

El Gobierno instó a garantizar el acceso a la justicia a todos los deudores en general que pudieran o no acceder a la radicación en línea.

También se dispuso que los deudores que se sometan al régimen de insolvencia, con ocasión de las consecuencias del COVID- 19, que tuvieran como propósito la construcción y venta de bienes destinados a la vivienda pueden, sin autorización del juez del concurso, hacer pagos a los créditos hipotecarios, con el fin de que el acreedor hipotecario levante el gravamen sobre la unidad respectiva y se suscriba la escritura pública de transferencia de dominio a favor del adquirente. (MINISTERIO DE COMERCIO, 2020)

El acuerdo que resulte de la negociación a ese deudor debe respetar los compromisos de los contratos de promesa compraventa u otro documento contractual que se haya suscrito en relación con esos inmuebles. De igual forma el acuerdo resultante deberá contener las estipulaciones para que se cumpla el compromiso de transferir los

inmuebles a los promitentes compradores, así como el levantamiento de medidas cautelares a favor de éstos.

De igual forma, se señaló que debe preferirse la adjudicación en bloque o en estado de unidad productiva en los procesos de liquidación judicial de los deudores, siempre que se pueda, en todo caso, los bienes serán otorgados siempre con el criterio de generación de valor. Estableció un procedimiento la celebración de contratos de fiducia para la transferencia de bienes y adjudicación como pago con derechos fiduciarios.

La lista de auxiliares de la justicia para los procesos de insolvencia, como se dijo arriba, se fortaleció, en el sentido de que se aumentó el número de los auxiliares con el fin de que la superintendencia de sociedades y los jueces civiles del circuito cuenten con alguno de ellos en sus despachos para la atención del trámite de insolvencia.

El decreto legislativo 772, reguló el proceso de reorganización abreviado para pequeñas insolvencias. Se estimó como pequeñas insolvencias, a aquellos procesos de deudores con activos mínimos o semejantes a cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tal trámite abreviado inicial con la solicitud de admisión ante el juez del concurso, verificada el cumplimiento de los requisitos, el juez del concurso admitirá la solicitud y dará inicio al proceso de reorganización abreviado. El auto que disponga la apertura del procedimiento además de ordenar lo estipulado en el artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, dispondrá: designación del promotor, se ordenará a éste la presentación de del proyecto de calificación y graduación de los créditos y determinación de derechos de voto. (MINISTERIO DE COMERCIO, 2020)

De la misma manera ordenó el Decreto Legislativo 772 que el deudor actualizará el inventario de activos y pasivos, inscribir el formulario de ejecución concursal en el Registro de Garantías Mobiliarias que señala la Ley 1676. A los despachos judiciales y entidades que conozcan de procesos ejecutivos, cobros coactivos y restitución de tenencia se les dará la orden y se comunicará lo establecido en los artículos 20, 22 y 70 de la Ley 1116 de 2006 y lo previsto en el artículo 4 del Decreto 772. Se fijará fecha y hora para llevar a cabo reunión de conciliación de las objeciones a la calificación y graduación de los créditos, determinación de los derechos de voto y presentación del acuerdo de reorganización. Las objeciones deben presentarse cinco días antes de la realización de la diligencia. Luego se fijará día y hora para la realización de diligencia de resolución de objeciones y de ratificación del acuerdo. La audiencia se desarrollará de la siguiente manera:

1. Se instalará la audiencia
2. Se presentará un resumen por parte del promotor de las objeciones conciliadas y de las que se encuentren pendientes por resolución.
3. El Juez escuchará a los dueños de las acreencias que hubieren decidido en contra para que sustenten sus inconformidades en relación con el acuerdo.
4. El juez invitará a las partes a negociar sus diferencias, tendrá la facultad de formular fórmulas de negociación
5. Sí existen votos adicionales, el juez incorporará los votos agregados y realizará el control de legalidad, confirmando o no el acuerdo

celebrado. El cual ejecutará a cabalidad con todas las disposiciones de mayoría e formalidades los acuerdos de restructuración que se llevan actualmente. Sí el juez confirma el lo acordado se ejecutarán las disposiciones bajo las formalidades del régimen de insolvencia empresarial y determinarán las ordenaciones dispuesto en el apartado No.36 del régimen antes mencionando. En caso de que no se confirme el acuerdo se ordenará la liquidación judicial simplificada del deudor y se designará el liquidador.

6. El promotor elaborará un acta donde se recoja todo lo sucedido.

Para las pequeñas insolvencias se reguló como se dijo anteriormente, el proceso de liquidación judicial simplificado. Advirtiéndole que a un solo proceso de liquidación judicial simplificado puede ser admitido un deudor, el deudor debe presentar solicitud de admisión con el cumplimiento de todos los requisitos de que trata la Ley 1116 de 2006. Una vez se haya verificado la información el juez del concurso admitirá la solicitud y dará inicio al proceso de liquidación judicial simplificada. El proceso se tramitará de conformidad con las siguientes reglas:

1. El juez de la liquidación judicial dará las ordenes de rigor orden de inicio de proceso de liquidación por auto y se designará un liquidador. Y se fijará el valor de los honorarios del liquidador y de gastos de custodia de archivo, sumas a las que se les adicionará el impuesto de valor agregado.

2. El liquidador se posesionará y dentro de los quince días siguientes presentará una estimación de los gastos de la liquidación.
3. De igual forma deberá, presentar ofertas vinculantes de venta de los activos que esperan visto bueno del inventario por parte del juez del concurso.
4. Los acreedores deberán presentar sus créditos al liquidador en el término de 10 días a partir de la des fijación del aviso que notifica la apertura del proceso de liquidación judicial.
5. Vencido el termino anterior, el liquidador deberá presentar en 15 días el proyecto de calificación y graduación.
6. Se correrá traslado, por el término de 5 días, del proyecto de calificación y graduación y del inventario de bienes presentado con la base contable del valor neto de la liquidación. No se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1116 de 2006 o del artículo 6 del Decreto 560 de 2020 a menos de que las partes así lo manifiesten, caso en el cual se procederá a realizar el correspondiente proyecto.
7. Los acreedores podrán hacer objeciones al valor neto de la liquidación o una oferta vinculante de compra de uno o varios bienes, desde luego por un valor superior al liquidado. Sí se presentan objeciones se correrá traslado de éstas, por el termino de 3 días y el juez del concurso deberá resolverlas. Sí no se presentan objeciones, o de existir conciliación o allanamiento a las mismas, el

juez aprobará la calificación y graduación de los créditos y del inventario presentado por el liquidador.

8. Se dará paso al cumplimiento de las ofertas de compraventas de activos y bienes por un valor superior al valor neto presentado.
9. Vencido el término anteriormente descrito, el liquidador presentará proyecto de adjudicación, para que el juez de la liquidación judicial profiera decisión de adjudicación, mediante auto susceptible de recurso de reposición.
10. Una vez adquiriera firmeza el auto de adjudicación, el liquidador dentro de los 20 días siguientes entregará los bienes.
11. El liquidador presentará al juez de liquidación judicial rendición de cuenta finales de su gestión realizada, junto con los soportes debidos. Se correrá traslado de la rendición de cuenta por el termino de 5 días.

El decreto 772, autorizó para que las rebajas, descuentos, multas, sanciones o intereses que obtengan los deudores fueran tomados como ganancia ocasional cuando se presenten o sean el resultado y parte de los procesos de insolvencia realizados en el marco de la Ley 1116 de 2006, del Decreto 560 de 2020 y el mismo 772. Igualmente autorizó que las ganancias ocasionales generadas como consecuencia de la aplicación de la presente medida puedan ser compensadas con las pérdidas.

El Gobierno Colombiano mediante Decreto Legislativo 842 del 13 de junio de 2020 en aras de aminorar el ensanchamiento de las consecuencias sobre las empresas afectadas

por la declaratoria de la emergencia económica, social, y ecológica no solo en el sector empresarial dispuso que las personas distintas a las comerciantes pueden acudir al procedimiento de recuperación empresarial previsto en el Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020.

Así mismo fijó unas obligaciones a los deudores tales como:

- a. Informar a todos los acreedores por el medio más expedito sobre el inicio de la negociación de emergencia de un acuerdo.
- b. Informar a los despachos judiciales y entidades que estén conociendo de procesos ejecutivos, cobros coactivos y de restitución de bienes del deudor por mora con la finalidad de que sean suspendidos aquellos procesos que se encuentren admitidos o aquellos que se admitan sobre las obligaciones de que trate el trámite.

Tales medidas tomadas por el Gobierno nacional colombiano de conformidad con la Ley 2159 de 2021, dictadas mediante los Decretos 560 y 772 del año 2020 fueron prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2022. A excepción de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 5 del Decreto Legislativo 560, concerniente a rebaja de sanciones, intereses y capital realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Colombiana – DIAN.

CAPITULO TERCERO

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

A continuación, se hace un resumen de lo decidido por los magistrados de la Corte Constitucional en sentencias C- 237 de 2020 y C- 378 de 2020, en el que se describe lo decidido a propósito del control automático ejercido a las medidas que de manera transitoria el Gobierno Colombiano adoptó que personas jurídicas y naturales en el marco de la emergencia declarada por la COVID- 19.

En el análisis se expone el resultado del escrutinio material realizado por la alta corporación a todo el contenido normativo de los decretos y lo decidido en cada sentencia.

1. Análisis Sentencia c-237 del año 2020

La Corte Constitucional en sentencia C-237 de 2020 condicionaron algunas de las disposiciones establecidas en el Decreto 560 de 2020 en el que se adoptó medidas transitorias en los procesos de insolvencia en el Marco de la emergencia decretada debido a lo que el mundo enteró sufrió y originado por el coronavirus. A continuación se describirá un caso en concreto.

La presidencia de Colombia remitió para revisión el texto del Decreto 560 de 2020 para los efectos de que se estableciera sí cumplía con las formalidades materiales y de efectos validos determinados por la Constitución y la ley. Luego de comunicarse el

inicio de la revisión, se decretaran pruebas y se valoraran conceptos de distintos participantes sobre el tema se concluyó que: Se declara exequible el Decreto 560 de 2020 bajo los siguientes entendidos:

- A.) Lo establecido por el apartado No. 3 en su parte primera. Correspondiente a la autorización de pagar anticipadamente sin autorización del juez del concurso también debe aplicarse a procesos ejecutivos de alimentos que tuviesen como en favor a menores de edad de dieciocho años y adultos que lo requiriesen puesto que se entienden como pequeñas acreencias.
- B.) De igual forma la aprobación de descargar el pasivo que autoriza el decreto 560 de 2020 en su artículo 4 a los deudores se manifestó que cuando el deudor tuviese un pasivo superior a la cualificación como empresa en marcha esta no podía afectar las acreencias en favor de alimentos de los adultos mayores.
- C.) cuando el pasivo del deudor sea superior a su valoración como empresa en marcha no puede afectar los créditos por alimentos a favor de adultos mayores.
- D.) También se decidió por la Corte sobre los estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización que las rebajas a sanciones, intereses y capital no comportan la posibilidad de la condonación de deudas fiscales.
- E.) Por último, pacíficamente se decidió que se pudiesen prorrogar los plazos para pagar las obligaciones insolutas exceptuando a los créditos por alimentos.

2. Análisis Sentencia c-378 del año 2020

Dentro de la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 772 del 3 de junio de 2020, la Corte luego de escuchar conceptos y valorar pruebas concluyó que el Decreto cumplía en términos generales con las formalidades formales o materiales.

La decisión de sala con varios salvamentos de votos parciales decidió condicionar el contenido del párrafo 1 del Artículo 3 en entendido de que lo dispuesto ahí aplica para todos los sujetos del concurso, es decir, todos los sujetos que indiquen su incapacidad para acceder al uso de radicaciones electrónica a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia.

El Alto Tribunal Constitucional determinó que el escrito del texto en el artículo 4 del Decreto no había modificado el régimen de levantamiento de gravámenes por tanto se debe atender las normas que regulan dicho trámite especialmente los respectivos a los establecidos en los artículos 70 y 77 de la Ley 1116 de 2016 o de la Ley 1676 de 2013, respecto de amparos especiales a ciertos trámites. Como por ejemplo la norma no recae sobre el trámite ejecutivos por deudas de alimentos.

Debe traerse a colación por último lo decidido por la Corte en el fundamento 187 de la sentencia analizada, esto es:

187. Tampoco se anula la posibilidad de que el acreedor con garantía mobiliaria, previa decisión del juez de concurso, pueda continuar -o iniciar- su

trámite de ejecución con independencia del proceso de reorganización, para lo cual, una adecuada comprensión de la norma prevista en el artículo analizado exige tener en cuenta que el levantamiento de medidas cautelares decretadas en estos precisos eventos solo será procedente si, previa intervención judicial en los términos y para los efectos previstos en la Sentencia C-145 de 2018,[185] se decide que el trámite de ejecución en curso debe llevarse por la cuerda del proceso de reorganización (Artículo 50 de la Ley 1676 de 2013). Y, finalmente, es claro que en el caso de los procesos en ejecución en los que, además del deudor se persigue a garantes, deudores solidarios o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, el levantamiento por ministerio de la ley de las medidas cautelares, que ordena el Artículo 4 del decreto legislativo en examen, solo procede frente a los bienes muebles del deudor insolvente y, además, que el derecho del acreedor a continuar su ejecución frente a los demás comprometidos, constituye un aspecto que se continuará regulando por lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 1116 de 2006. (Corte Constitucional, C-378,2020).

Lo anterior nos insta a tener en cuenta los regímenes sobre levantamiento de medidas cautelares anteriores.

Es claro que los Decretos Legislativos fueron pertinentes y cumplieron con los fines del Estado, se protegieron garantías fundamentales de los sujetos implicados y se gestionó el estado de insolvencia que las personas naturales y jurídicas atraviesan en el marco de la emergencia declarada por el actual gobierno colombiano.

CONCLUSIONES

1. De la aplicación del método descriptivo se pudo concluir que el Gobierno Colombiano identificó las necesidades principales de las personas naturales y jurídicas en estado de incapacidad de pago. Solucionó de manera transitoria los problemas en el trámite de insolvencia. Procuró porque la economía, en principio de las personas naturales comerciantes y personas jurídicas en riesgo de quiebra tuvieran la oportunidad de superar el estado de cesación de pagos. Estudió de manera proporcional las restricciones que existían en el régimen ordinario de insolvencia, amparando los derechos fundamentales de la población de especial protección: como lo son trabajadores, niños, niñas, adolescentes y mayores con dependencia alimentaria.
2. Del análisis realizado en este trabajo monográfico se puede concluir que en Colombia para el trámite de insolvencia para personas naturales no comerciantes se le tiene que impartir reglamentación completa, ya que en la actualidad está regulado por normas generales que no logran por sí sola, sino que se debe acudir a reglamentación distinta para satisfacer y amparar garantías fundamentales de diversos actores.
3. Así mismo esta descripción de las medidas transitorias adoptadas por el Gobierno Nacional, encontramos que existe la necesidad de que el régimen ordinario del trámite de insolvencia se introduzcan unos cambios importantes como lo es la suspensión de cobros de impuestos, rentas, multas cuya obligación sea exigible a la persona en estado de mora. Resultan diversas las

razones por las cuales una persona: natural o jurídica acuda al trámite de insolvencia que deben ser valoradas por el juez del concurso o negociación de deudas que deban tener incidencia y que obliguen a la administración nacional, departamental y/o distrital - municipal a ceder en el cobro de algunos emolumentos para los fines de brindar apoyo a la persona en estado de cesación. El gobierno nacional en apoyo de su alto tribunal constitucional, autónomo en sus decisiones y garante de la constitución política avaló cambios importantes en el trámite que deben ser tenidos en cuenta para ser implementados de manera permanente.

4. Todavía podemos concluir, existen requisitos que deben ser omitidos y que hay cargas dentro del procedimiento que deben ser asumidas por el Estado en garantía del derecho fundamental al acceso a la justicia como lo es la intervención del auxiliar judicial de la justicia. Como vimos en la descripción de las medidas transitorias adoptadas por el Gobierno Colombiano el deudor sigue asumiendo los honorarios, situación que no cambió durante la emergencia y que no se compadece de la precariedad de recursos y la situación de dificultad que vive el deudor.
5. De igual forma, podemos ultimar que en Colombia se legisle sobre un régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes en el que los términos sean más abreviados, teniendo en cuenta que el ordinario no distingue entre obligaciones pequeñas, medianas o grandes. El actual régimen da un tratamiento dispone de un término injustificado para aquellas deudas que no necesitan de un análisis profundo haciendo que tanto deudores como acreedores

esperen un tiempo que puede ser invertido en el cumplimiento del acuerdo logrado.

6. Respecto de la facultad que tiene la parte insoluta de hacer ventas de activos propiamente fijos pero no afectos a la operación o giro ordinario del negocio, para saldar deudas pequeñas nos damos cuenta de que la medida permite un trato diferencial entre acreedores, pues a simple vista prefiere a los pequeños acreedores, rompiendo los presupuestos de los principios de universalidad e igualdad, a tal punto de que genera un inseguridad jurídica en los acreedores que estén ejecutando por vía judicial o extrajudicial obligaciones en las que se haya logrado el decreto de medidas cautelares.
7. Ahora bien, con la expedición de la Ley 2159 de 2021, que dispuso que las personas naturales no comerciantes podían adherirse al trámite descrito en los decretos 560 y 772 de 2020 establecido en principio para el campo empresarial se concluye que tales medidas no tuvieron en cuenta lo ya decantado por la Corte Constitucional en sentencia 699 de 2007. En aquella oportunidad la Corte Constitucional consideró lo siguiente:
8. La decisión del legislador de establecer un régimen de insolvencia específicamente orientado a las empresas y a las personas jurídicas, sin incluir en él a las personas naturales no comerciantes, no es contraria a la Constitución, en la medida en que, por un lado existen diferencias entre los dos conjuntos de personas que son significativas en función de la materia que se está regulando, y por otro, la decisión legislativa atiende a fines importantes, que busca resolver de manera especializada sustrayendo del régimen de insolvencia a aquellos

sujetos que no se avienen a las condiciones previstas para el mismo. La existencia de un imperativo constitucional, en relación con un régimen de insolvencia aplicable a las personas naturales no comerciantes tampoco puede derivarse del derecho de acceso a la Administración de Justicia, o del derecho al debido proceso, porque se trata de un régimen complejo que atiende a resolver la situación de los deudores y de una diversidad de acreedores, en un contexto de interés público determinado por la necesidad de preservar el crédito y la actividad económica, y para ello es posible encontrar distintas respuestas jurídicas, cuya definición se desenvuelve en un ámbito de configuración legislativa, sin que quepa imponer como obligados conforme a la Constitución determinados remedios procesales. (Corte Constitucional, 2007)

9. En este sentido, las personas naturales no comerciantes se les dejó un panorama un poco confuso pues a interpretación del operador o de los sujetos intervinientes se dejó la aplicación de los beneficios e innovaciones del nuevo régimen transitorio. En lugar de sólo autorizar a las personas naturales no comerciantes para iniciar el trámite de insolvencia bajo los presupuestos 560 y 772 de 2020, el Gobierno Nacional Colombiano debió reglamentar de manera transitoria separada el trámite de insolvencia para personas naturales no comerciantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ambito Juridico. (2021). *Ambito Juridico*. Obtenido de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/modifican-el-funcionamiento-de-los-consultorios-juridicos>

Conceptos Juridicos. (2021). *Conceptos Juridicos*. Obtenido de <https://www.conceptosjuridicos.com/co/acreedor/>

CONFIAM S.A.S. (2021). *CONFIAM S.A.S.* Obtenido de IMPUESTOS: Clasificación de las Personas Naturales: <https://confiam.com/perso.html>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (2012). *CODIGO GENERAL DEL PROCESO*. Diario Oficial No. 48.489. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html#T%C3%8DTULO%20PRELIMINAR

Congreso De La Republica. (2012). *Código General Del Proceso - Ley 1564 de 2012*. Diario Oficial No. 48.489. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html#T%C3%8DTULO%20PRELIMINAR

Congreso de la Republica de Colombia - Ley 2113 de 2021. (2021, 29 de Julio). POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168026>

Congreso de la Republica de Colombia - Ley 23 de 1991. (1991, 21 de Marzo). *Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones.* Bogotá: Diario Oficial 39752. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6546>

Congreso De La Republica De Colombia. (1873). *Ley 84 de 1873 -Codigo Cvil.* Diario Oficial No. 2.867. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html#1

Congreso De La República De Colombia. (2001, 05 de Enero). *Modificación Normas Relativas A La Conciliación Y Se Dictan Otras Disposiciones - LEY 640 DE 2001.* Diario Oficial No. 44.303. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html#1

Congreso De La Republica De Colombia. (2006, 27 de Diciembre). *Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia - LEY 1116 DE 2006.* Diario Oficial No. 46.494. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1116_2006.html

Congreso de la Republica de Colombia. (2008, 31 de Diciembre). *Ley 1266 de 2008.* Bogotá: Diario Oficial No. 47.219. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1266_2008.html

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. (2010, 10 de Enero). *Ley 1380 de 2010 - Regimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante.* Bogotá: Diario Oficial No. 47.603. Recuperado el 16 de 11 de 2021, de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1380_2010.html

Congreso De La República De Colombia. (2021, 29 de Julio). *POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR*. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168026>

Congreso de la Republica de Colombia. (2021. 29 de Julio). *REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR*. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74174>

Constitución Política de Colombia. (1991). *Artículo 229*. Congreso de La Republica de Colombia. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; Universidad Del Magdalena. (2021). *Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación*. Obtenido de <http://consultorio.unimagdalena.edu.co/Home/CentroConciliacion>

El Presidente de la republica de Colombia. (1971, 12 de febrero). *Estatuto del ejercicio de la abogacía*. Diario Oficial. N. 33255. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=92330>

García, M., & Marin, O. (2014). *Curso de formación de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante*. Barranquilla, Colombia: Grupo Editorial Ibañez. Recuperado el 14 de 10 de 2021, de [file:///C:/Users/juan0/Downloads/Curso%20de%20formaci%C3%B2n%20en%20Insolvencia%20de%20Persona%20Natural%20No%20Comerciante%20\(1\)%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/juan0/Downloads/Curso%20de%20formaci%C3%B2n%20en%20Insolvencia%20de%20Persona%20Natural%20No%20Comerciante%20(1)%20(1).pdf)

Guevara y Vergara, 2. (2013). El Rol de los Conciliadores en la Insolvencia Económica de la Persona [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. *EL ROL DE LOS CONCILIADORES EN LA INSOLVENCIA ECONÓMICA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE*. Repositorio Institucional, Bogotá D.C. Recuperado el 16 de 11 de 2021, de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10083/GuevaraGomezAlejandro2013.pdf?sequence=3>

Hernandez, J., Cifuentes, E., & Angarita, C. (1992). Sentencia No. T-414/92. *DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR/DERECHO A LA INFORMACION*. Relatoría de la Corte Constitucional - Republica de Colombia. Recuperado el 16 de 11 de 2021, de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-414-92.htm>

Ministerio de Justicia y del Derecho; Fundación Liborio Mejía. (s.f.). *Elementos Fundamentales para la Formación en el Proceso de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante*. Obtenido de Ministerio de Justicia: [https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/MASC/Documents/Cartilla%20con%20contenidos%20ba%CC%81sicos%20del%20diplomado%20IPNNC%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/MASC/Documents/Cartilla%20con%20contenidos%20ba%CC%81sicos%20del%20diplomado%20IPNNC%20(1)%20(1).pdf)

Nieto, L. (s.f.). *INSOLVENCIA (NEGOCIACIÓN DE DEUDAS) DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE ¿MITO O REALIDAD?* Obtenido de INSOLVENCIA COLOMBIA: [http://www.leydeinsolvencia.co/Insolvencia%20\(negociaci%C3%B3n%20de%20deudas\)%20de%20persona%20natural%20no%20comerciante%20insolvencia%20colombia.pdf](http://www.leydeinsolvencia.co/Insolvencia%20(negociaci%C3%B3n%20de%20deudas)%20de%20persona%20natural%20no%20comerciante%20insolvencia%20colombia.pdf)

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. (1970, 06 de Agosto). *Código de Procedimiento Civil - Decreto Ley 1400 de 1970*. Diario Oficial 33150. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6923>

Presidente De La Republica De Colombia. (1971, Junio 16). *Decreto 410 de 1971 -Codigo De Comercio*. Diario Oficial No. 33.339. Obtenido de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html

Sarmiento, A. S., López, A. A., & García, J. S. (Junio de 2015). La conciliación, herramienta de interdisciplinaria para exaltar la cultura de acuerdos en la solución de conflictos en Colombia. *Justicia Juris*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85712015000100008

Superintendencia de Sociedades. (01 de 03 de 2019). *TIRANT LO BLANCH*. Recuperado el 16 de 11 de 2021, de <https://www.tirantonline-com-co.biblioteca.unimagdalena.edu.co/latam/documentoLatam/lectura/16259212?tolgeo=latam>

Trujillo, E. (2020). *Impugnar*. *Economipedia.com*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/impugnar.html>

Vargas, L. (2010). Sentencia T-079/10. *FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS SUPERINTENDENCIAS*. Corte Constitucional - Republica de Colombia. Recuperado el 16 de 11 de 2021, de [https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/MASC/Documents/Cartilla%20con%20contenidos%20ba%CC%81sicos%20del%20diplomado%20IPNNC%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/MASC/Documents/Cartilla%20con%20contenidos%20ba%CC%81sicos%20del%20diplomado%20IPNNC%20(1)%20(1).pdf)

Guerrero, P. (2020). Sentencia C-378/20. *DECRETO LEGISLATIVO EN DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE PROCESOS DE INSOLVENCIA*. Corte Constitucional – Republica de Colombia. Recuperado el 03 de 05 de 2022, de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/C-378-20.htm>.